



MEJIA Y ASOCIADOS
ABOGADOS ESPECIALIZADOS
COPIA OFICINA

JUEZ SEGUNDO LABORAL
DEL CIRCUITO DE CALI

2020-1184944

RECIBIDO
14 FEB 2020

Fecha

WFF P/Dora

Señora
JUEZ SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI
E. S. D.

REFERENCIA: ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA
ASUNTO: CONTESTACION DE DEMANDA
DEMANDANTE: ELIZABETH OSORIO RESTREPO C.C. 31867999
DEMANDADO: Administradora Colombiana de Pensiones-COLPENSIONES
RADICACIÓN: 76001310500220190035800

ANGIE CAROLINA MUÑOZ SOLARTE, abogada en ejercicio, identificada como aparece al pie de mi correspondiente firma, en mi calidad de apoderada externa de la Administradora Colombiana de Pensiones - en adelante COLPENSIONES -, cordialmente solicito al Despacho reconocermela personería para actuar de acuerdo al poder adjunto y estando dentro del término de la oportunidad procesal, de manera respetuosa me permito dar contestación a la demanda propuesta dentro del proceso de la referencia instaurado contra mi representada, para que mediante sentencia que haga tránsito a cosa juzgada se absuelva a mi representada de todas y cada una de las pretensiones propuestas en la demanda y se condene en costas a la demandante.

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD DEMANDADA, REPRESENTACIÓN LEGAL Y DOMICILIO

La Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES- es una empresa industrial y comercial del estado del orden nacional, organizada como entidad financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio de Trabajo con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, cuyo objeto consiste en la administración estatal del régimen de prima media con prestación definida incluyendo la administración de los beneficios económicos periódicos de que trata el Acto Legislativo 01 de 2005 modificadorio del artículo 48 de la constitución Política, de acuerdo con lo que establezca la Ley que los desarrolle. La representación legal la ejerce el Doctor **JUAN MIGUEL VILLA LORA**.

El domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., en la Carrera 10 No. 72-33 Torre B piso 11, número telefónico 2170100.

PRONUNCIAMIENTO EXPRESO FRENTE A LOS HECHOS DE LA DEMANDA

AL PRIMERO: ES CIERTO, la señora ELIZABETH OSORIO RESTREPO nació el 20 de septiembre de 1960, tal como se visualiza en los documentos allegados con la demanda.

AL SEGUNDO: ES PARCIALMENTE CIERTO, si bien se puede corroborar que efectivamente la demandante acredita 34 años de edad para el 1 de abril de 1994, el resto del hecho esgrimido por la parte actora va más encaminado a aseveraciones jurídicas y no hechos relacionados con el caso en concreto

AL TERCERO: ES CIERTO, la demandante efectivamente estuvo vinculada a la entidad en los espacios temporales señalados, como bien lo certifica COLPENSIONES al momento de realizar el reconocimiento de la pensión de vejez.

AL CUARTO: ES CIERTO, la entidad en su resoluciones y en las historias laborales expedidas, certifica que la señora ELIZABETH OSORIO RESTREPO, estuvo afiliada al régimen desde 1981 y alcanzo a cotizar un total de 1875.29 semanas.



AL QUINTO: ES CIERTO, COLPENSIONES reconoció pensión de vejez a la señora ELIZABETH OSORIO RESTREPO, en concordancia con los parámetros normativos aplicables para el caso en concreto, por medio de la resolución SUB 227982 del 13 de octubre de 2017, reconociéndole una mesada pensional inicial de \$1.377.137.

AL SEXTO: NO ES CIERTO, COLPENSIONES al analizar la pensión de vejez de cualquier afiliado, realiza las operaciones aritméticas necesarias, y realiza la comparación de las mesadas, según le resulte más beneficioso al usuario, y en el caso que nos ocupa no es la excepción, tal como se visualiza en la resolución SUB14972 del 18 de enero del 2019.

AL SÉPTIMO: ES CIERTO, y a la señora ELIZABETH se le tuvo encuentra al momento de realizar el estudio, al igual como cuando se realizó su reliquidación pensional en la resolución SUB14972 del 18 de enero de 2019

AL OCTAVO: ES CIERTO, la actora realizó reclamaciones a la entidad las cuales fueron debidamente contestadas conforme a la norma y en los términos que la ley permite.

AL NOVENO: NO ME CONSTA, primeramente las aseveraciones planteadas por la apoderada de la señora ELIZABETH OSORIO RESTREPO, no son hechos que ocupen el caso en concreto, sino interpretaciones aritméticas y normativas, situaciones sobre las cuales no se puede controvertir, además de ello hay que recordarle a la actora la ecuación que plantea la ley 797 de 2003 que modificó la ley 100 para la tasa de remplazo.

AL DECIMO: ES CIERTO, a la actora se le resolvió solicitud del derecho pensional y se le realizó una reliquidación de la mesada pensional, ajustándola a derecho y reconociéndole la pensión más beneficiosa a sus derechos.

AL UNDECIMO: NO ME CONSTA, nuevamente la apoderada de la parte demandante, trae a colación argumentos y apreciaciones sobre las cuales no se puede generar ningún tipo de apreciación, puesto que no son un hecho de la demanda si no apreciaciones personales de la abogada, situación que no se resuelve en los hechos

AL DUODECIMO: NO ME CONSTA, al ser nuevamente apreciaciones jurídicas y no hechos directos de la demanda, sobre los mismos no se puede generar controversia alguna, salvo corroborar que efectivamente la demandante cotizó un monto superior a la 1400 semanas, mas sin embargo en la norma citada por la actora en ninguno de sus apartados hace referencia en la obligatoriedad del reconocimiento del 80% por superar el número de semanas, toda vez que el artículo señala la ecuación a aplicar para el caso en concreto.

DECIMO TERCERO: NO ME CONSTA, como es una apreciación interpretativa de la norma, sobre la misma no se puede suscitar controversia alguna, sin embargo se puede aseverar que la entidad ha reconocido la pensión en los parámetros normativos que se aplican para el caso en controversia.

DECIMO CUARTO: NO ME CONSTA, como es una apreciación interpretativa de la norma, sobre la misma no se puede suscitar controversia alguna, sin embargo se puede aseverar que la entidad ha reconocido la pensión en los parámetros normativos que se aplican para el caso en controversia.

HECHOS FUNDAMENTOS Y RAZONES DE DERECHO DE LA DEFENSA

Para resolver la controversia que aquí se plantea, es preciso traer a colación el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, el cual regula el ingreso base de liquidación en los siguientes términos:

“Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los



diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE”.

“Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto en el inciso anterior, el trabajador podrá optar por este sistema, siempre y cuando haya cotizado 1250 semanas como mínimo.”

Igualmente, es menester señalar que el artículo 34 de la Ley 100 con la modificación introducida por la Ley 797, en cuyo texto se expresa lo siguiente:

“ARTÍCULO 34. MONTO DE LA PENSIÓN DE VEJEZ. (Modificado por el artículo 10 de la Ley 797 de 2003) El monto mensual de la pensión de vejez, correspondiente a las primeras 1.000 semanas de cotización, será equivalente al 65% del ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1.000 hasta las 1.200 semanas, este porcentaje se incrementará en un 2%, llegando a este tiempo de cotización al 73% del ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1.200 hasta las 1.400, este porcentaje se incrementará en 3% en lugar del 2%, hasta completar un monto máximo del 85% del ingreso base de liquidación.

El valor total de la pensión no podrá ser superior al 85% del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima de que trata el artículo siguiente.

A partir del 1o. de enero del año 2004 se aplicarán las siguientes reglas:

El monto mensual de la pensión correspondiente al número de semanas mínimas de cotización requeridas, será del equivalente al 65%, del ingreso base de liquidación de los afiliados. Dicho porcentaje se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente:

$r = 65.50 - 0.50 s$, donde:

r = porcentaje del ingreso de liquidación.

s = número de salarios mínimos legales mensuales vigentes.

A partir del 2004, el monto mensual de la pensión de vejez será un porcentaje que oscilará entre el 65 y el 55% del ingreso base de liquidación de los afiliados, en forma decreciente en función de su nivel de ingresos calculado con base en la fórmula señalada. El 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 semanas. Adicionalmente, el 1o. de enero de 2006 se incrementarán en 25 semanas cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015.

A partir del 2005, por cada cincuenta (50) semanas adicionales a las mínimas requeridas, el porcentaje se incrementará en un 1.5% del ingreso base de liquidación, llegando a un monto máximo de pensión entre el 80 y el 70.5% de dicho ingreso, en forma decreciente en función del nivel de ingresos de cotización, calculado con base en la fórmula establecida en el presente artículo. El valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima.”

Como se puede leer, el artículo 34 establece claramente que el monto de las pensiones causadas con posterioridad al 1° de enero de 2004 -como ocurre en este caso-, se debe calcular con la fórmula: **$r = 65,50 - 0,50 s$** .



En la fórmula, la variable "s" equivale al número de salarios mínimos que contiene el ingreso base de liquidación.

En el caso sub examine, el I.B.L. que resultó de promediar los salarios de cotización de la demandante fue de \$1.736.741, y el salario mínimo en el año 2017 -cuando fue reconocida la pensión- fue de \$737.717. De ello se obtiene:

$$\begin{aligned}s &= \text{I.B.L.} / \text{salario mínimo} \\s &= \$7.982.635 / \$737.717 \\s &= 2.35\end{aligned}$$

Luego entonces, al reemplazar "s" en la fórmula, el resultado que arroja es:

$$\begin{aligned}r &= 65,50 - 0,50 s \\r &= 65,50 - 0,50 \times 2.35 \\r &= 64.32 \%\end{aligned}$$

Pero el artículo 34 de la Ley 100 de 1993, en su inciso final establece que a partir del 2005, por cada 50 semanas adicionales a las mínimas requeridas, el porcentaje se incrementará en un 1,5%.

Para determinar entonces, cuántas eran las semanas "mínimas requeridas" en el caso del demandante, hay que determinar la fecha en que se causó el derecho pensional, que es distinta de la fecha en que empezó a disfrutar de la pensión. Para ello debe tenerse en cuenta que la edad de 62 años la cumplió el 25 de febrero del 2017 y para esta época había reunido 1.631 semanas.

Ahora, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 9º de la Ley 797 de 2003, las semanas mínimas requeridas para el año 2017 eran 1.300, y como el actor cotizó 1825, tiene 525 semanas adicionales que incrementan en un 15.75% el monto de su pensión. No obstante, el porcentaje máximo posible a sumar es el 15% y el total máximo es el 80%. Lo anterior quiere decir que la tasa de reemplazo definitiva aplicable a su I.B.L. es:

$$\begin{aligned}r &= 64.32\% + 15\% \\r &= 79.32\%\end{aligned}$$

Así las cosas, se observa que el porcentaje obtenido del 79.32% es el mismo que empleó COLPENSIONES para fijar la cuantía de la mesada pensional del demandante, y por ello, es dable concluir que la entidad se ajustó desde todo punto de vista a las previsiones de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003.

Ahora bien, respecto de la reliquidación de la pensión la entidad actuó conforme a la Ley y la jurisprudencia, puesto que una vez efectuadas las operaciones aritméticas de rigor, a fin de establecer la prestación, se evidencia que no se arrojan valores a favor de la actora, tal y como se puede evidenciar en las resoluciones SUB 216043 del 15 de agosto de 2018, SUB 250403 del 21 de septiembre de 2018 y DIR 19473 del 2 de noviembre de 2018.

PRONUNCIAMIENTO EXPRESO A LAS PRETENSIONES

A LA PRIMERA ME OPONGO: A la reliquidación pensional, puesto que una vez efectuadas las operaciones aritméticas correspondientes no se generaron valores a favor del demandante, tal y como se puede evidenciar en las resoluciones SUB 14972 del 18 de enero de 2019.



A LA SEGUNDA ME OPONGO: Al reconocimiento y pago del retroactivo pensional por reajuste pensional, dado que si no existe obligación con la principal, menos la habría frente a una pretensión secundaria o consecuencial. Además de lo anterior, téngase en cuenta que no ha existido una causa injustificada para el no pago de la prestación, por el contrario la misma se encuentra plenamente soportada en las previsiones legales.

A LA TERCERA ME OPONGO: Al reconocimiento y pago de los intereses moratorios, dado que si no existe obligación con la principal, menos la habría frente a una pretensión secundaria o consecuencial. Además de lo anterior, téngase en cuenta que no ha existido una causa injustificada para el no pago de la prestación, por el contrario la misma se encuentra plenamente soportada en las previsiones legales, además de que la pretensión no es aplicable para el caso en concreto

A LA CUARTA ME OPONGO: Al reconocimiento y pago de la indexación, dado que si no existe obligación con la principal, menos la habría frente a una pretensión secundaria o consecuencial. Además de lo anterior, téngase en cuenta que no ha existido una causa injustificada para el no pago de la prestación, por el contrario la misma se encuentra plenamente soportada en las previsiones legales.

A LA QUINTA ME OPONGO: Al reconocimiento y pago de la costas y agencias en derecho, pues la entidad, reitero no adeuda suma alguna de dinero a la actora e igualmente no se evidencia negligencia en el actuar de mi representada, pues la negativa se ajustó a las previsiones legales y es por ello que a éste es a quien se debe condenar en costas y agencias en derecho.

Como se aprecia en lo manifestado anteriormente, me opongo a cada una de las pretensiones y condenas de la demanda por considerar que no tienen fundamento legal para prosperar, y solicito desde ahora se absuelva a **COLPENSIONES** de todas ellas con base en lo que habrá de ser probado en el proceso, para tal efecto propongo las siguientes **EXCEPCIONES:**

PERENTORIAS:

A) INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN Y COBRO DE LO NO DEBIDO

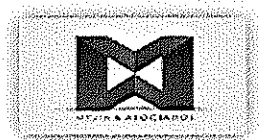
No existe obligación por parte de mi representada en reliquidar la pensión, puesto que una vez efectuadas las operaciones aritméticas correspondientes no se generaron valores a favor del demandante, tal y como se puede evidenciar en las resoluciones SUB 14972 del 18 de enero de 2019.

En igual sentido, acontece con el asunto de la tasa de remplazo del 80%, pues una vez efectuadas las operaciones aritméticas de rigor, se observa que el porcentaje obtenido del 79.32% es el mismo que empleó COLPENSIONES para fijar la cuantía de la mesada pensional del demandante, y por ello, es dable concluir que la entidad se ajustó desde todo punto de vista a las previsiones de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003.

En ese orden de ideas, COLPENSIONES únicamente debe ajustarse plenamente a la Ley, en todas y cada una de sus actuaciones administrativas, tal y como lo dispuso en el caso particular que se ciñó de manera rigurosa, exacta y correcta a las disposiciones constitucionales, legales y a los reglamentos de la Institución, razón por la cual no es dable desconocer por vía de Jurisprudencia, las tan claras reglas legales sobre prestaciones y obligaciones de las Entidades de seguridad social, que todos los juzgadores están obligados a acatar.

B) PRESCRIPCIÓN:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del C.P.T. propongo la prescripción como medio exceptivo de cualquier derecho reclamado que pudiese resultar probado y frente al cual haya operado ese fenómeno.



C) LA INNOMINADA:

Atendiendo lo dispuesto en el artículo 282 del Código General del Proceso, le solicito muy atentamente que si en el transcurso del proceso encuentra probados los hechos que constituyen una excepción, la reconozca oficiosamente al momento de proferir sentencia.

D) BUENA FE:

La Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES al negar las pretensiones de la parte actora, obró bajo el pleno convencimiento de negarlos conforme a la Ley, teniendo en cuenta los aspectos fácticos y jurídicos aplicables para la situación particular del demandante para el reconocimiento de la prestación.

MEDIOS DE PRUEBA

Solicito se tengan, decreten y practiquen como medios de prueba de las excepciones propuestas las siguientes:

A) EN MEDIO MAGNÉTICO:

- Expediente administrativo administrativa del demandante .

SOLICITUD CONDENA EN COSTAS

Solicito a la Señora Juez, en nombre de mi poderdante, que de ser negadas las pretensiones y condenas y probadas las excepciones de la demanda, la parte actora sea condenada al pago de las costas y agencias en derecho a favor de la Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES conforme a lo establecido en el artículo 365 del Código General del Proceso.


Además de lo anterior, en el evento de prosperar parcialmente las excepciones propuestas solicito respetuosamente a la señora Juez tenga en cuenta al fallar, el numeral 5° del artículo 365 del Código General del Proceso, el cual expresa:

"En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión."

NOTIFICACIONES

La suscrita recibirá notificaciones en la secretaría de su Despacho, o en la Calle 5 oeste No. 27-25 Tel: 8889161-64 de Cali.

De Usted señora Juez, respetuosamente;


ANGIE CAROLINA MUÑOZ SOLARTE
C.C. No. 1'151.957.635 De Cali
T.P. No. 317.254 del C. S. J.

ELAB/JDA
REP/1598



COPIA OFICINA
JUZGADO SEGUNDO LABORAL
DEL CIRCUITO DE CALI

Señora

JUEZ SEGUNDA LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI

E. S. D.

Fecha

14 FEB 2020

Firma

P. Dorca.

REFERENCIA: ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA
DEMANDANTE: ELIZABETH OSORIO RESTREPO C.C. 31867999
DEMANDADO: Administradora Colombiana de Pensiones-COLPENSIONES
RADICACIÓN: 76001310500220190035800

ASUNTO: PODER ESPECIAL

MARIA JULIANA MEJIA GIRALDO, identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.144.041.976 de Cali (Valle), en mi calidad de representante legal suplente de la firma **MEJIA Y ASOCIADOS ABOGADOS ESPECIALIZADOS S.A.S.**, bajo el NIT 805.017.300-1 sociedad con domicilio principal la ciudad de Cali constituida mediante escritura pública No. 1297 del 04 de julio de 2010 de la Notaria Cuarta (04) de Cali inscrita en cámara y comercio el 06 de julio de 2015 con el No 9038 del Libro IX y reformada mediante escritura pública 2082 del 08 de junio de 2015 de la Notaria cuarta (04) de Cali inscrita en cámara y comercio el 02 de julio de 2015 con el No. 9038 del libro IX, actuando en nombre y representación de la Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones para realizar las actuaciones necesarias para la defensa jurídica de esta Entidad dentro del proceso del asunto, mediante poder general otorgado mediante la escritura pública No. 3373 del 03 de septiembre de 2019 de la Notaria novena (09) del Circulo de Bogotá.

A su vez, manifiesto que a través del presente escrito **SUSTITUYO** poder a la Doctora **ANGIE CAROLINA MUÑOZ SOLARTE**, igualmente mayor y vecina de esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía No. **1'151.957.635 de Cali** y portadora de la Tarjeta Profesional No. **317.254**, el apoderado queda revestido de las mismas facultades otorgadas a la suscrita, como el conciliar, transigir, desistir, sustituir, reasumir, renunciar a este poder y de las demás facultades que sean necesarias para el cumplimiento de este mandato, según lo establece el Art. 77 del C.G.P

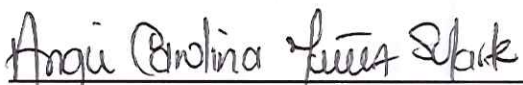
En consecuencia, sírvase reconocer personería a la Doctora **ANGIE CAROLINA MUÑOZ SOLARTE**, en los términos del presente mandato.

Renuncio a término de notificación y ejecutoria del auto favorable.

De Usted, respetuosamente,

Acepto,


MARIA JULIANA MEJIA GIRALDO
C.C. No. 1.144.041.976 de Cali
T.P. No. 258.258 del C. S. J.


ANGIE CAROLINA MUÑOZ SOLARTE
C.C. No. 1'151.957.635 De Cali
T.P. No. 317.254 del C. S. J.

RECEIVED
INVESTMENT IN LABOR
DEPT. OF AGRICULTURE
1910
JAN 10 1910

THE SECRETARY OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D. C.

TO THE SECRETARY OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D. C.

DEPT. OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D. C.

DEPT. OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D. C.